

Bogotá, 14 de julio de 2014

Señores

**CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA**

Bogotá D.C.

1

Asunto: Comentarios a la propuesta de normas de aseguramiento de la información financiera para la convergencia.

Atendiendo al llamado que hacen Ustedes al público en general, para recibir observaciones y recomendaciones que brinden apoyo al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en el actual proceso de convergencia hacia estándares internacionales, específicamente en lo que se refiere al aseguramiento de la información financiera para las entidades de los grupos 1 y 2, manifestamos:

1. Celebramos que el proceso que se está llevando a cabo actualmente, tenga como propósito fundamental la regulación del ejercicio de la auditoría, campo profesional que adolece de un corpus regulativo acorde con sus responsabilidades, pues hasta ahora han sido los revisores fiscales quienes han sufrido las consecuencias de las sanciones disciplinarias, gracias a la existencia de una clara regulación de su ejercicio, mientras que los primeros ejercen sin un marco jurídico específico para sus actuaciones, lo que les ha valido para ejecutar acciones contra la fe pública, sin salir sancionados por ello. Diversas experiencias internacionales, especialmente las muy conocidas de Estados Unidos y Europa, dejan en evidencia las grandes debilidades éticas que han tenido muchos auditores individuales y firmas de auditoría<sup>1</sup> en su actuación profesional, así como los escándalos en que se han visto envueltos, lo que pone en tela de juicio la responsabilidad de tan importante figura, y en tal sentido, es un acierto que nuestro país pretenda regular al respecto. Cabe señalar que en muchas ocasiones, las sanciones de las que son objeto los Revisores Fiscales responden a actuaciones que no son las suyas de fiscalización sino del campo

---

<sup>1</sup> Resulta de urgente necesidad prevenir que en Colombia se presenten casos de la gravedad y magnitud de las experiencias norteamericanas de Global Crossing, Enron, Inclore, Arthur Andersen, Merck, Adelphia, Eron, Tyco, QuestCom, WorldCom, Xerox, AOL, Time Warner, o de las europeas de Maxwell, BCCI, Banesto, Gowex, Guinness, Fagor, Metalgesellschaft, Vivendi, Ahold, Parmalat y un largo etcétera, del cual no parece que Colombia haya aprendido nada, a pesar de sonoras alertas como las de Saludcoop e Interbolsa. Algunos sectores de la profesión consideran que se trata de “casos aislados”, no obstante, debe tenerse en cuenta como un aspecto visible de una forma de control que está sujeta discusión: Auditoría.



de la auditoría, razón por la cual, especificar su corpus regulativo permitirá también clarificar los procesos sancionatorios.

2. La comunidad contable nacional debe recordar que la función de Auditoría tiene una naturaleza evaluativa *-en tanto no hace control perceptivo y previo-* está limitada por la definición de su alcance y sólo asume una responsabilidad funcional en las organizaciones, lo cual deja clara la dimensión de su papel de apoyo y subordinación a la administración en la tarea de evaluar la eficiencia funcional de las empresas. Como todos sabemos, la Revisoría Fiscal es una institución de control mixto, que representa la función fiscalizadora del Estado en la gestión de los entes privados, en procura de defender el interés público, el interés societario y el de los grupos de interés. Es claro que no hay ninguna esfera funcional de la organización que escape a su control integral y su responsabilidad es tan amplia como la de la misma administración, allende de que no está subordinada a ella, pues incluso debe vigilarla por mandato de los propietarios, el Estado y la Sociedad. No de otra forma se explica que de manera reiterada, muchos auditores y firmas de Auditoría se rehúsen a asumir las funciones y responsabilidades civiles y penales que la ley le impone a los revisores fiscales y que prefieran acogerse a la seguridad que otorga la cobertura y responsabilidad limitadas que ofrece la Auditoría. Habida cuenta de las grandes diferencias que existen entre la figura de la Auditoría y la institución de la Revisoría Fiscal, queda claro que la propuesta del CTCP apunta a reglamentar el ejercicio de la auditoría y no el de la Revisoría Fiscal, el cual ya está ampliamente regulado en la legislación colombiana, y que si la intención del CTCP fuera en sentido contrario, estamos seguros de que *-por elemental principio de transparencia informativa-* lo haría de forma amplia, pública, clara y explícita. En cuanto a la revisoría fiscal, hacemos un llamado tanto al CTCP como a la comunidad contable y empresarial nacional, a reconocer, adoptar e instituir para su uso, la Orientación Profesional de Revisoría Fiscal, emitida el 21 de junio de 2008 por el CTCP, en la cual se compilan los aspectos conceptuales, éticos y técnicos para su ejercicio, lo que permite de nuevo establecer la diferencia entre Revisoría Fiscal y Auditoría, como modalidades distintas del ejercicio profesional contable.
3. Consideramos que en todo proceso democrático, la participación implica que quien intervenga sea escuchado con el fin de ser reconocido o rebatido con ideas que realmente le confronten, de manera que no sea un convidado de piedra sino un ser deliberante; hasta el momento lo que se ha observado en las discusiones alrededor de la convergencia, es que las ideas son recibidas e incluso publicadas, pero se descartan si no se adhieren a los actuales lineamientos de adopción del CTCP, en abierta contravención de los criterios de operación plasmados en la ley 1314 de 2009, donde se establece claramente que el proceso a su cargo debe ser abierto, amplio, transparente y de público



conocimiento y discusión. Además, el proceso establecido en la ley 1314 de 2009, establece que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de normas y estándares, no a la adopción de unos estándares en particular. Reducir la convergencia a la adopción conlleva el desconocimiento del proceso mismo de convergencia, el cual se entiende como la búsqueda de compatibilidad entre regulaciones divergentes y no el reemplazo de una regulación preexistente por otra, como ha venido sucediendo en Colombia con el caso de las normas de información financiera y que no deberá suceder con las normas alusivas al aseguramiento. La convergencia regulativa implica un proceso de comparación, análisis y compatibilización de prácticas, reglas, normas e informes, del cual es un excelente ejemplo el Acuerdo de Norwalk, pactado entre los reguladores de Estados Unidos y el IASB y que precisamente tuvo como característica, la búsqueda conjunta de regulaciones compatibles y la eliminación de diferencias sustanciales, cimentada en la compatibilidad entre los reportes financieros, y no en el reemplazo de la regulación federal preexistente. En la opción de convergencia se desarrolla “un proceso de acercamiento mutuo, un trabajo permanente de negociación de la diversidad, que puede eliminar las diferencias por una aceptación de mutaciones entre las regulaciones que pretenden su síntesis en una estructura única, dentro de un determinado lapso de tiempo. Esta vía, requiere la existencia de verdaderos escenarios de concertación en donde no existan diferencias sustanciales de ejercicio de poder, y por tanto, estén ausentes las asimetrías económicas y políticas” (CTCP, Orientación profesional de presentación de estados financieros con base en estándares internacionales de contabilidad e información financiera IAS/ IFRS, 2009).

4. El proceso adelantado por el CTCP invita a participar en el proceso de convergencia, pero observamos que no permite a la comunidad contable decidir ni incidir en la decisión, máxime cuando lo que asume como convergencia no corresponde con lo que a escala internacional se acepta como tal. Nos preocupa que esta situación llevara al CTCP a utilizar la participación restringida del público para legitimar su decisión de adoptar los estándares de aseguramiento de la información, proceso que replica de idéntica forma, el ya surtido para adoptar los estándares de contabilidad e información financiera. Así pues, la imposibilidad de conocer, debatir y rebatir oportunamente las propuestas, comentarios y críticas ofrecidas por la comunidad contable en torno al tema, evidencia fisuras en la transparencia del proceso y su consecuencia directa, la baja confiabilidad del mismo.
5. Aducir que la general aceptación es un criterio probado de calidad, desconoce que en sí misma la pretendida aplicación universal de cualquier estándar no garantiza mejores prácticas o incremento de calidad en los procesos que intenta regular. A modo de ejemplo, puede mencionarse la implementación y



cumplimiento de los estándares ISO 14000, que por sí mismos poco o nada han contribuido a una mejora real del ambiente, pese a ser ampliamente aceptados y exigibles en muchos países del mundo, pues más allá de su implementación, se requiere ejecutar fuertes sistemas de vigilancia por parte de las autoridades ambientales para que efectivamente tales estándares logren un impacto importante. Del mismo modo, la general aceptación que se pregona para el caso de los estándares de información financiera, y en este caso de auditoría y aseguramiento, no tiene por qué desconocer o ignorar el papel de los procesos de vigilancia y fiscalización que aporta la revisoría fiscal, la cual debe mantenerse por razones de justicia, eficiencia y seguridad. Justamente, la calidad de un estándar está relacionada con el cumplimiento de criterios que son validados a partir de su discusión, y no solo de la aceptación formal de una mayoría desinformada. La “general aceptación”<sup>2</sup> como una de las tendencias clave *-aunque no única-* del desarrollo del pensamiento y prácticas contables en los países que realmente han realizado este proceso, ha pasado por la discusión pública de todos los actores comprometidos en ese campo de conocimiento, en los aspectos y tiempos requeridos para llegar a acuerdos que gocen de amplia legitimidad. Es un despropósito asumir de forma inmediata, que lo que acepta una supuesta mayoría es automáticamente de mayor calidad o es necesariamente el mejor conocimiento posible; la historia nos demuestra en los diversos campos del conocimiento social y natural este error de apreciación: durante 2400 años y hasta 1633, “todo el mundo” aceptaba como idea estándar que la tierra era plana, y lo ratificaba la suprema autoridad mundial del momento.

6. No obstante la estrechez del espacio de debate y la ambigüedad conceptual de la propuesta institucional, debemos aclarar que el concepto de aseguramiento, derivado del proceso de optimización del control organizacional es objeto de importantes discusiones y si se toman como referencia aportes desarrollados, por ejemplo, por la Federación de Expertos Contables Europeos FEE (“Principles of assurance: fundamental theoretical issues with respect to assurance in assurance engagements”, FEE, 2003) es una idea que convoca, abarca y rebasa la noción tradicional de auditoría, al tiempo que bien podría incluir la institución de la Revisoría Fiscal, ya regulada en Colombia, y a otras formas de control organizacional de alta vigencia y pertinencia en diversas partes del mundo, las cuales son

---

<sup>2</sup> De forma ilustrativa, la realización de los ciclos de capacitación del programa “Formación de Formadores” en las Regionales Antioquia-Santander, pone de manifiesto el desconocimiento de los conceptos de la general aceptación, una metodología muy importante en la definición de normas contables que, no obstante, se intenta imponer en Colombia de forma inapropiada, desconociendo su origen, desarrollo histórico y condiciones de implementación.



desconocidas por la propuesta del Consejo<sup>3</sup>. En consecuencia, creemos necesario que la comunidad contable nacional no se llame a engaño en lo que respecta al alcance del concepto de aseguramiento, que según la propuesta del CTC<sup>4</sup> se reduce a la labor de la auditoría y sus formas derivadas<sup>4</sup>, visión que consideramos equivocada y limitada, puede generar además penosas confusiones en la comunidad contable y empresarial nacional.

Finalmente, les convocamos a acoger en plenitud los criterios de un proceso de convergencia normativa, que permita construir un diálogo de altura académica y técnica en torno a los estándares de aseguramiento, en beneficio del Estado, las organizaciones y el conjunto de los colombianos.

Agradecidos por su amable atención, les saludamos muy cordialmente.

Agregamos a continuación los nombres de las personas y organizaciones que suscriben esta comunicación:

1. Benjamín Torrado García - Contador Público - TP 8773 -T
2. César Augusto Vélez Rivera - CC 1040356791
3. Daniela Mazo Córdoba - CC 1037546852
4. Daverson Andrés Chavarría Gómez - C.C. 1.036.654.093
5. Diego Fernando Pereira Lara - CC: 1128199686
6. Dilsa Margarita Quintero Quintero - CC 1.214.724.276
7. Elkin Horacio Quirós Lizarazo - Contador Público - CC 71.743.489
8. Esnever Duran Santanilla - C.C.16.185.179 - T.P.140512-T
9. Fabián Leonardo Quinche Martín - CC. 80824744 de Bogotá
10. Francy Machado Hoyos - CC 43081422 - Contadora Pública
11. Guillermo Mantilla Plata - 19.138.266 de Bogotá
12. Gustavo Adolfo García - C.C. 16.348.395 - T.P. 61697-T
13. Henry Antonio Duarte Márquez. C.C: 13.475.008 de Cúcuta. T.P.: 63.796-T
14. Jacinta Lucia Cuadros Puerta - C.C. No. 21.969.392 - TP 166524-T
15. Jairo Alfonso Jauregui López - CC. 13.466.846 - TP 23380-T.
16. Jenifer Alexandra Cano Garcia - C.C. 1128457413
17. John Arley Vásquez Rendon - CC 1036939685
18. John Fernando Diossa Castro - C.C 71 173 050

<sup>3</sup> La continuidad de la revisoría fiscal en el nuevo marco normativo es viable asociada a “normas de aseguramiento de información distinta de la anterior” (es decir, un aseguramiento distinto, mas no conflictivo con las “normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica”) (art. 5 Ley 1314 de 2009). La revisoría fiscal sigue siendo posible (además de necesaria) sin que sea rival de la auditoría y menos del aseguramiento. Son dos formas diferentes y separadas de evaluación y control. Aclarando que la revisoría fiscal no se limita a la información financiera.

<sup>4</sup> La propuesta del CTC<sup>4</sup> incluye la adopción de los diversos componentes de los ISA, tales como los Estándares Internacionales de Control de Calidad, Estándares Internacionales de Auditoría y demás estándares relacionados.





19. Jorge Alexander Rodríguez Otálora - CC 80.541.206
20. Jorge Eliécer Álvarez Barahona - C.C. 70.850.699
21. Leana María Saavedra Cerón - C.C. 29.874.977 - Contadora Pública
22. Leidy Viviana García Klinger - Contadora Pública - CC 38.640.971
23. Lucy Gutierrez Arias - C.C. 26.558.560
24. Luis Alberto Arcila Pérez - Contador Público - C.C. 19.252.69
25. Luis Raúl Uribe Medina - Contador Público - C.C. 14.992.929
26. Luz Marina Patiño Henao - C.C. 42088988
27. Miryam Arango Arango - Contadora Pública
28. Natalia Gallón Vargas - C.C. 1.027.885.301
29. Pedro Emiro Palacios Claro - Contador Público - C.C. 13.463.056
30. Ramiro Cifuentes Vélez - C.C. 14.878.412
31. Rocío Cano Acosta - C.C. 32431354
32. Rocío Lucena Rodríguez Gantiva - Contadora Pública - C.C. 51.867.993 de Bogotá
33. Rodrigo Loaiza García - T.P 28433 T
34. Rubiela Jiménez Aguirre - Contadora pública - C.C. 30.282.033
35. Sandra Yaneth Cañas Vallejo - C.C. 1.017.175.940
36. Ximena Gómez - CC 39491330
37. Yefferson Ome Perdomo - C.C 1.117.523.399 DE FLORENCIA - CAQUETÁ
38. Yenny Lucina Córdoba Murillo - Contadora Pública - Especialista en Revisoría Fiscal - C.C. 35897543
39. Yessica Múnera Alzate - C.C. 1.152.444.151

## Organizaciones

40. Asociación de Contadores Públicos Del Huila - ASCONPHU
41. Centro de Estudios e Investigaciones Contables de la Universidad Autónoma Latinoamericana - CEICUAL
42. Colegio Colombiano de Contadores Públicos Capítulo de Bucaramanga
43. Colegio Colombiano de Contadores Públicos Capítulo Montería
44. Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Norte de Santander
45. Colegio Colombiano de Contadores Públicos Unilibristas
46. Colegio de Contadores Públicos de Antioquia
47. Colegio de Contadores Públicos de Colombia CONPUCOL
48. Colegio de Contadores Públicos de Duitama
49. Colegio de Contadores Públicos de la Universidad del Sinú
50. Colegio de Contadores Públicos del Atlántico
51. Colegio de Contadores Públicos del César
52. Colegio de Contadores Públicos del Quindío
53. Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos
54. Federación de Contadores Públicos de Colombia
55. Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia



# Dignidad Contable Nacional

- 56. Fundación para la investigación y el desarrollo de la ciencia contable  
FIDESC
- 57. Grupo de Investigación CONTAS “Contabilidad, Ambiente y Sociedad”  
Fundación Universitaria Luis Amigó
- 58. Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones - GICOR - De la  
Universidad Autónoma Latinoamericana
- 59. Movimiento Social Profesional Dignidad Contable

